

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	LUIS FREY ZAPATA HENAO
DEMANDADO	UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
RADICADO	05001-31-05-001-2019-00436-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	HONORARIOS PROFESIONALES
DECISIÓN	Confirma.

*Medellín, siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023)*

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso ordinario laboral, promovido por el señor **LUIS FREY ZAPATA HENAO** contra la **UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 010**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

**I. – ASUNTO**

Es materia de la Litis, decidir, por parte de este colegiado, el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia absolutoria proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín – Ant., en la audiencia pública celebrada el día el 7 de junio de 2022, dentro del proceso referenciado.

## **II. – HECHOS DE LA DEMANDA**

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso en síntesis que, el señor LUIS FREY ZAPATA HENAO, en su calidad de arquitecto, celebró un contrato de prestación de servicios con la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA el día 21 de julio de 2014, cuyo objeto consistía en ejercer las acciones necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en un convenio celebrado entre la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, que a su vez tenía por objeto realizar unos estudios y diagnósticos para la formulación de los proyectos barrios sostenibles en los sectores Golondrinas, Versalles, Rancho de Lata, al interior de los proyectos llanaditas, La Cruz, y El Picacho, dentro del marco del proyecto cinturón verde metropolitano en la ciudad de Medellín.

En virtud de lo anterior, el aquí demandante se comprometió a participar en las actividades programadas, incluyendo la preparación de la información técnica requerida para la postulación de las familias, participar en los talleres de diseño participativo urbano; participar en la construcción de la propuesta metodología, realizar la ficha de diseño, participar en la propuesta urbana para el polígono y la definición del plan habitacional por etapas, y también debía entregar los diseños de la propuesta de mejoramiento de 25 viviendas, el diseño de los espacios públicos incluidos en la propuesta, los Vo Bo y aprobaciones ante taller de espacio público, curaduría urbana, planeación municipal, interventoría y otros, elaborando y organizando los documentos necesarios.

Para la ejecución del contrato de prestación de servicios se estipuló un plazo de dos (2) meses, y como honorarios profesionales se pactó la suma de \$8.000.000, los cuales fueron debidamente cancelados.

También aduce la parte activa que, a pesar de haberse cumplido todas las obligaciones contractuales, la Universidad no le ha cancelado los trabajos realizados con posterioridad al cumplimiento del contrato, en acatamiento a unas observaciones efectuados por la EDU, estos trabajos que no estaban contenidos en el contrato inicial también daban lugar al reconocimiento de

honorarios profesionales a favor del demandante, que deben ser pagados con sus correspondientes intereses.

Que en varias oportunidades y mediante correo electrónico el demandante ha reclamado lo adeudado ante los órganos directivos de la Universidad de San Buenaventura, cuyo monto estimado es de \$27.000.000, teniendo en cuenta para ello un promedio mensual de \$1.700.000, la solicitud se acompañó de un informe que contiene las actividades desplegadas por el demandante.

### **III. – PRETENSIONES**

La acción judicial está dirigida a que SE CONDENE a la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA a reconocer y pagar al señor LUIS FREY ZAPATA HENAO, la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/L (\$27.000.000), por haberle dado continuidad al proyecto plasmado en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre las partes de fecha 21 de julio de 2014, igualmente se reclama una condena ultra y extra petita, el pago de intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera, las costas del proceso y la indexación de las condenas.

### **IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA**

Admitida la demanda, y corrido el traslado de rigor correspondiente, la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA dio respuesta oportuna, a través de su apoderado judicial (folios 4 al 10 del archivo PDF 05), indicando frente a los hechos allí narrados, que son ciertos aquellos que aluden a la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales entre las partes, así como la existencia del convenio con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, donde también participaron otros profesionales y estudiantes de la Universidad, encontrándose la universidad a paz y salvo con el demandante por cualquier concepto derivado del contrato de prestación de servicios, sin que le consten los restantes supuestos fácticos, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la totalidad de pretensiones y cargos, y formuló en su defensa las excepciones de mérito que denominó: “*PRESCRIPCIÓN*;

*INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA Y POR PASIVA; PAGO Y COMPENSACIÓN; BUENA FE DE LA UNIVERSIDAD; MALA FE POR PARTE DEL ACTOR; y la GENÉRICA”.*

## **V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA**

En audiencia pública de trámite y juzgamiento celebrada el 7 de junio de 2022, la señora JUEZ DE CONOCIMIENTO profirió sentencia, DECLARANDO probada la excepción de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, propuesta por el apoderado judicial de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, a quien ABSOLVIÓ de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor LUIS FREY ZAPATA HENAO.

Finalmente impuso las costas del proceso en la primera instancia, a cargo del demandante y en favor de la demandada, fijándole como agencias en derecho la suma de \$1.000.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la juez de primer grado que de conformidad con el postulado de la carga de a prueba, a la parte demandante le incumbía demostrar el haber realizado otras actividades profesionales, que le hayan sido encomendadas por la universidad a través de su representante legal o sus delegados, con posterioridad al vencimiento del contrato de prestación de servicios.

Sin embargo, para la funcionaria judicial de primer grado la prueba documental aportada para acreditar los hechos expuestos en el libelo genitor, no tiene el suficiente valor probatorio, pues estos documentos ni siquiera están firmados por el representante legal de la Universidad de San Buenaventura, y por ello no resulta idónea para demostrar la existencia de la presunta prórroga o adición del contrato de prestación de servicios pactado.

Finalmente coligió la *A Quo* que las actividades adicionales que dice haber desplegado el actor, no se regían por un nuevo contrato, sino que eran parte del contrato inicial, mismo que el demandante confesó que le fue pagado en su totalidad.

## **VI. – RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El apoderado judicial del demandante LUIS FREY ZAPATA HENAO, mostró su inconformidad contra la sentencia de primer grado, a la que acusa de indebida valoración probatoria, pues en su criterio la prueba documental aportada a litis, sí daba lugar a proferir una sentencia condenatoria a favor del demandante, motivos por los cuales solicita su revocatoria, y en su lugar se acojan las pretensiones de la demanda.

### **Alegatos de conclusión**

El apoderado judicial del demandante presentó sus alegatos de conclusión en segunda instancia, a través de los cuales insistió en la procedencia de las pretensiones formuladas, precisando al respecto que hechos narrados, se encuentran debidamente demostrados con la prueba documental aportada y que hasta el presente no ha sido desvirtuada, pues de conformidad con el art. 244 del Código General del Proceso: “los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos”, pruebas que no fueron debidamente valoradas por la *A Quo*. Y finalmente señala que los testigos presentados por la parte demandada no son idóneos para esclarecer los hechos debatidos, pues no estuvieron presentes durante la ejecución del contrato de prestación de servicios, y al ser empleados activos de la demandada, su testimonio no resulta imparcial, y debía ser valorado con mayor rigurosidad.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

## **VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

**Naturaleza jurídica de la pretensión. – Honorarios profesionales, carga de la prueba.**

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma,

Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

El objeto central de esta Litis, consiste en determinar, si la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA le canceló o no al señor LUIS FREY ZAPATA HENAO la totalidad de los honorarios profesionales acordados y/o causados en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito el día 21 de julio de 2014<sup>1</sup>.

### **Honorarios Profesionales**

Frente al tema, es preciso recordar que los HONORARIOS PROFESIONALES, es aquella remuneración por servicios que una persona natural presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, material, manual o mecánico. Por lo general, este tipo de servicios es prestado por personas con un título profesional, o con una gran experiencia y habilidad en un área específica de conocimiento.

La realización de este tipo de servicios es propia de una profesión liberal, pues en esta clase de servicios, no existe un vínculo laboral entre las partes, sino que, por lo general, la relación se formaliza mediante un contrato de prestación de servicios, mismo que tiene una naturaleza meramente civil o comercial.

Siendo la autonomía e independencia del contratista la que constituye el elemento esencial de esta forma de contratación, y que a su vez se convierte en el elemento diferenciador respecto al contrato laboral, toda vez que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Igualmente, debe tenerse muy presente que el contrato de prestación de servicios es consensual, esto es, que sólo se requiere el consentimiento de las

---

<sup>1</sup> Folios 3 al 8 del archivo PDF 03 Anexos-Demanda.

dos partes para que se formalice el contrato de prestación de servicios, que implica una obligación de hacer algo.

Respecto a los contratos consensuales señala el artículo 1500 del Código Civil lo siguiente: “...*El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; **y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento...***”

Por su parte, el artículo 824 del Código de Comercio respecto a la forma en que las personas pueden obligarse, señala:

*“...Los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientras no se llene tal solemnidad...”*

De lo anterior, se colige que el contrato de prestación de servicios se puede acordar en forma verbal, dado que la ley no exige que se haga por escrito, aunque sería lo más recomendable para las partes, para prevenir eventuales y futuras controversias.

No obstante, y pese a la naturaleza civil y/o comercial de este tipo de contrato, la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para dirimir las controversias que se susciten, así lo tiene establecido el numeral 6º del art. 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**“ARTICULO 2o. COMPETENCIA GENERAL.** <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

(...)

**6.** Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.

(...)”

## **CASO CONCRETO**

Afirma la parte demandante que el contrato de prestación de servicios pactado con la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA de fecha 21 de julio de 2014 y cuya duración inicial era de dos (2) meses se prorrogó por otros dos (2) años, pues fue el tiempo que le tomo atender y sanear los requerimientos técnicos u objeciones presentadas por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU; y para la demostración de su existencia, se valió de la prueba documental obrante a folios 1 al 48 del archivo PDF 02 “AnexosDemanda”, relacionados en el acápite de pruebas en los siguientes términos:

### **P R U E B A S**

- **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito entre la Universidad San Buenaventura Seccional Medellín y Luis Frey Zapata Henao.**
- **Fotocopia de los correos electrónicos dirigidos a diferentes autoridades de la Universidad San Buenaventura.**
- **Informe presentado a la Universidad San Buenaventura, sobre las actividades realizadas por el Arquitecto Luis Frey Zapata Henao.**
- **Copia del contrato suscrito entre el EDU y la Universidad San Buenaventura.**
- **Copia de la Carta dirigida por el Arquitecto Luis Frey Zapata Henao a la Oficina de Contratación Pública de la Universidad San Buenaventura.**

Por su parte, la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, alegó estar a paz y salvo por todo concepto con el demandante LUIS FREY ZAPATA HENAO, aduciendo que los HONORARIOS PROFESIONALES pactados con el demandante en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito el día 21 de julio de 2014, le fueron debidamente cancelados, y que las demás vinculaciones que el actor sostuvo con la Universidad, se dieron en virtud de contratos individuales de trabajo a término fijo inferiores a un año para desempeñar el cargo de “DOCENTE AUXILIAR CATEDRA”, según consta a folios 11 al 20 del archivo PDF 05.

De otro lado, y con la misma finalidad probatoria, la parte demandada hizo comparecer al proceso a los testigos SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ CRUZ, y ADRIANA PATRICIA ZAPATA, quienes manifestaron lo siguiente:



El señor SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ CRUZ refirió ser el coordinador de contratación pública y privada de la universidad san buenaventura desde el mes de julio de 2018, y que tiene conocimiento del caso del demandante, por la reclamación que este le hizo a la universidad vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2018, donde decía reiterar una solicitud del 25 de octubre de ese mismo año, la cual fue resuelta por un comité, integrado por las directivas de la universidad.

También afirmó que la universidad solo ha celebrado un contrato de prestación de servicios con el demandante para la ejecución de un proyecto urbanístico a favor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, el cual fue ejecutado y pagado por la universidad, pero desconoce el tiempo de duración del citado contrato.

Hizo claridad en cuanto a que los contratos de prestación de servicios que celebra la Universidad siempre se dan por escrito, así como sus adiciones o prorrogas, y que la única persona que puede obligar a la Universidad es su representante legal.

Señaló que en el convenio de asociación con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, participaron varios contratistas, y estudiantes de la facultad de artes integradas de la Universidad de San Buenaventura, y culminó a finales del año 2015 o principios del año 2016.

Manifestó no tener conocimiento de las actividades realizadas por el demandante en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito con la Universidad.

A su turno la testigo ADRIANA PATRICIA ZAPATA, dijo ser la tesorera de la Universidad de San Buenaventura desde hace 5 años, institución donde labora desde hace 20 años, anteriormente como coordinadora de nómina, y que si bien no conoce personalmente al demandante, si tuvo conocimiento que este estuvo vinculado a la institución como docente en la facultad de arquitectura, sin recordar los periodos, y también trabajó para unos proyectos con la EDU y el Municipio de Bolívar, a través de contratos de prestación de servicios.

Como tesorera y anteriormente como coordinadora de nómina, solo tiene conocimiento que al demandante se le hicieron pagos en virtud del contrato de prestación de servicios, y logró verificar en el sistema el pago de 3 contratos a favor del actor, relacionados con la EDU, el Municipio de Bolívar y de Girardota, y que todos los contratos de prestación de servicios deben estar firmados por el rector para poderse pagar.

Luego de efectuar la valoración conjunta de la prueba, atendiendo a las reglas de la sana crítica, tal y como lo ordena el art. 176 del Código General del Proceso, la juez de primer grado, concluyó que de la prueba documental aportada por el demandante (fls. 1 al 48 del archivo PDF 002), no podía inferirse que el actor continuó realizando actividades al servicio de la Universidad de San Buenaventura con posterioridad al vencimiento del plazo de dos (2) meses estipulado en el contrato de prestación de servicios, pues las reclamaciones efectuadas por el demandante a través de los correos electrónicos no son prueba suficiente para la demostración de este supuesto fáctico.

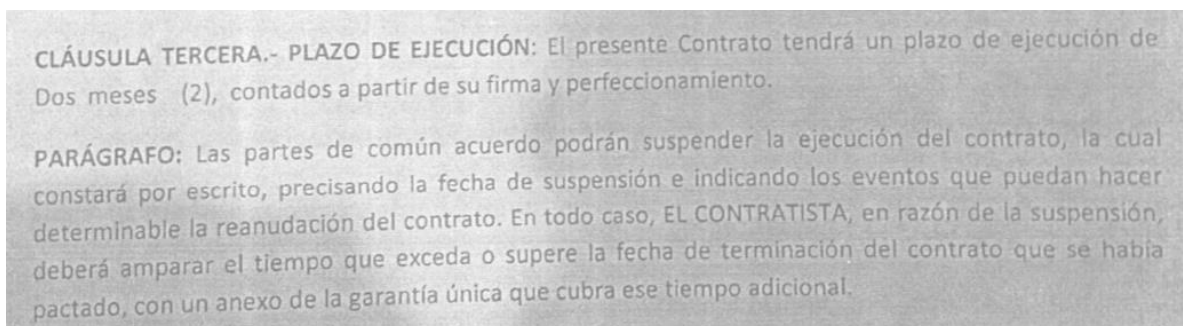
Estima la Sala, que lo resuelto por la juez de primer grado se encuentra ajustado a derecho, pues sus razonamientos se corresponden con la realidad probatoria vertida en la Litis, por cuanto de los elementos de prueba allegados por la parte demandante, no se puede concluir con certeza, la existencia de un contrato verbal de prestación de servicios profesionales celebrado entre las partes, y mucho menos que se tratara de una prorrogación u adición al contrato escrito de prestación de servicios suscrito el día 21 de julio de 2014.

El apoderado de la parte demandante, insistió en su recurso de alzada, que, de la prueba documental anexada al libelo genitor, sí se podía colegir que el actor si realizó actividades propias del contrato de prestación de servicios más allá del plazo final de dos (2) meses allí establecido, para cumplir lo acordado entre la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA y la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, en el contrato de asociación N° 063 del 24 de enero de 2014.

Sin embargo, estima la Sala que estas actividades profesionales presuntamente desarrolladas por el señor LUIS FREY ZAPATA HANAO,

adicionales a las convenidas en el contrato de prestación de servicios de fecha 21 de julio de 2014, no se encuentran suficientemente demostradas en el plenario, toda vez que lo afirmado por el actor tanto en su demanda como en el interrogatorio de parte a él practicado, no fue ratificado con ningún otro medio probatorio, pues el actor ni siquiera solicitó la práctica de prueba testimonial para comprobar sus dichos, pese haber afirmado que en la ejecución del convenio de asociación con la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO – EDU, participaron otros profesionales y también estudiantes de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, a los que relacionó en la reclamación de fecha 19 de enero de 2017 (fls. 27 y 28 del archivo PDF 02), y que podían dar fe de esas actividades profesionales que dice haber desarrollado durante casi dos (2) años, para cumplir con los requerimientos técnicos formulados por la EDU, respecto a los proyectos urbanísticos que esta había contratado con la Universidad.

Y es que según la CLÁUSULA TERCERA del contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 21 de julio de 2014, este tenía un PLAZO DE EJECUCIÓN de dos (2) meses, contados a partir de su firma y perfeccionamiento, veamos:



CLÁUSULA TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El presente Contrato tendrá un plazo de ejecución de Dos meses (2), contados a partir de su firma y perfeccionamiento.

PARÁGRAFO: Las partes de común acuerdo podrán suspender la ejecución del contrato, la cual constará por escrito, precisando la fecha de suspensión e indicando los eventos que puedan hacer determinable la reanudación del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA, en razón de la suspensión, deberá amparar el tiempo que exceda o supere la fecha de terminación del contrato que se había pactado, con un anexo de la garantía única que cubra ese tiempo adicional.

Y dado que estos últimos condicionamientos no están siendo controvertidos, el referido contrato se tendría como ejecutado el día 24 de septiembre de 2014.

Es por lo anterior, que considera la Sala, que esa supuesta ejecución extendida u adicional de un contrato de prestación de servicios profesionales hasta finales del año 2016, le obligaba al demandante a realizar un mayor esfuerzo probatorio, pues en virtud del principio de la carga de la prueba desarrollado en el art. 167 del Código General del Proceso,

quien pretenda el reconocimiento y pago de honorarios, debe demostrar que: i) Celebró un contrato para una gestión determinada, ii) Que ésta fue realizada y, iii) Que conforme con las reglas o clausulado celebrado entre las partes, se tasó un reconocimiento monetario.

Es decir, debía brindarle al administrador de justicia, todos aquellos elementos probatorios que sin lugar a dudas le generaran el convencimiento o la certeza necesaria para acceder a las pretensiones contenidas en la litis, pues dos años de actividades profesionales al servicio de UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, debían dejar algún vestigio de su existencia, tales como fotografías, diseños arquitectónicos, visitas de campo a las obras donde conste expresamente la participación del señor LUIS FREY ZAPATA HENAO, o en su defecto se tuvieran testigos presenciales de los hechos, así lo precisó la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL4902 de 2021, M.P. Dr. Gerardo Botero Zuluaga, veamos:

*“...Acorde con dichos planteamientos, lo primero que debe indicar la Sala, es que contrario a lo manifestado por el actor, la acción se instauró para que se declarara el derecho al reconocimiento y pago de los honorarios, es decir, un proceso declarativo, en el que, con las pruebas aportadas por el interesado, conforme con el principio general de la carga de la prueba, prevista en el artículo 177 del CPC -hoy artículo 167 del CGP- debe demostrar que: i) celebró un contrato para una gestión determinada, partiendo de la base que a las partes ha quedado la facultad primigenia para definir la contraprestación de los servicios, y si existe ese pacto, aquél se erige en la fuente que normalmente define la controversia generada, en razón al tipo de cláusulas y el objeto del contrato; ii) que ésta fue realizada y, iii) que conforme con las reglas o clausulado celebrado entre las partes, se tasó un reconocimiento monetario...”*

Lo anterior, por cuanto el operador jurídico está obligado a fundar sus decisiones judiciales en las pruebas regular y oportunamente allegadas a la litis.

Sin embargo, los medios de prueba aportados al plenario, como bien lo concluyó la juez de primer grado, resultaron insuficientes, pues los documentos presentados por el demandante (Correos electrónicos, informe de actividades realizados), no provienen de la parte demandada y, por ende, resulta imposible inferir la existencia de una obligación incumplida.

Así las cosas, al no existir prueba de la adición o prórroga del contrato celebrado, y menos aún el haberse celebrado otro contrato de prestación de servicios, mal podría colegirse y declararse un incumplimiento por parte de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, motivos por los cuales se confirmará la absolución impartida en la primera instancia.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la improsperidad del recurso de apelación formulado por el apoderado judicial del demandante LUIS FREY ZAPATA HENAO, las costas procesales en la primera instancia estarán a cargo de dicha parte y en favor de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, según lo dispuesto en el art. 365 del Código General del Proceso, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M/L (\$300.000).

#### **VIII. - DECISIÓN.**

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia objeto de apelación de fecha 7 de junio de 2022 proferida por el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

**SEGUNDO: COSTAS** procesales en segunda instancia a cargo del señor LUIS FREY ZAPATA HENAO y en favor de la demandada UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, dentro de las cuales se fijan como agencias en derecho la suma de TRESCIENTOS MIL PESOS M/L (\$300.000).

**TERCERO:** en su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

**CUARTO:** Se ordena la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Los magistrados**



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA